

OEA/Ser.L/V/II
Doc. 68
12 mayo 2023
Original: español

INFORME No. 60/23
PETICIÓN 2211-12
INFORME DE ADMISIBILIDAD

MARIO YOBANNY MENDOZA AMADOR
HONDURAS

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 12 de mayo de 2023.

Citar como: CIDH, Informe No. 60/23. Petición 2211-12. Admisibilidad. Mario Yobanny Mendoza Amador. Honduras. 12 de mayo de 2023.

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Bajo reserva de identidad
Presunta víctima:	Mario Yobanny Mendoza Amador
Estado denunciado:	Honduras
Derechos invocados:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ¹ , en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos); y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; también se invocan otros tratados internacionales ²

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH³

Presentación de la petición:	5 de diciembre de 2012
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	19 de abril de 2018
Notificación de la petición al Estado:	15 de octubre de 2018
Primera respuesta del Estado:	22 de febrero de 2019
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	14 de julio de 2020, 15 de octubre de 2020 y 29 de abril de 2022
Observaciones adicionales del Estado:	18 de abril de 2022

III. COMPETENCIA

Competencia <i>Ratione personae</i>:	Sí
Competencia <i>Ratione loci</i>:	Sí
Competencia <i>Ratione temporis</i>:	Sí
Competencia <i>Ratione materiae</i>:	Parcial, Convención Americana (depósito de instrumento de ratificación realizado el 8 de septiembre de 1977). Sin embargo, Honduras no ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos)
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, en los términos de la Sección VI
Presentación dentro de plazo:	Sí, en los términos de la Sección VI

¹ En adelante, "la Convención Americana" o "la Convención".

² La Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

³ Las observaciones de cada parte fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

Posición de los peticionarios

1. La parte peticionaria alega la responsabilidad internacional del Estado hondureño por el presunto abuso de autoridad, tortura y lesiones provocadas por agentes de la Policía en contra del joven Mario Yobanny Mendoza Amador (en adelante “la presunta víctima”); así como la falta de investigación efectiva y sanción a los responsables.

2. Los peticionarios narran a manera de contexto que la presunta víctima se encontraba en una situación vulnerable: vivió en situación de calle desde los siete años al quedarse huérfano, y al momento de los hechos sufría adicción a las drogas y se encontraba en situación de pobreza.

3. Indican que, la noche del 31 de mayo del 2007, la presunta víctima y un amigo se encontraban en el Barrio La Plazuela (conocido también como el Arbolito) de la ciudad de Tegucigalpa cuando seis policías los retuvieron y registraron sus pertenencias. Afirman que el joven Mendoza Amador llevaba dinero, cigarrillos y tñer que utilizaba como estupefaciente; los policías le regresaron sus pertenencias, con excepción del disolvente. Entonces, uno de los policías comenzó a rociar a la presunta víctima con dicha sustancia y procedió a encender un fósforo, quemándolo en varias partes de su cuerpo.

4. El amigo de la presunta víctima intentó apagar el fuego, pero no lo conseguía. Aseveran que los policías vieron esto y se retiraron de la escena, sin pedir auxilio alguno; incluso antes de retirarse les dijeron: *“no te preocupes vos que en el reporte [...] le vamos a poner intento de suicidio”*⁴. El amigo eventualmente pudo apagar el fuego con un suéter y avistar el número de la patrulla cuando los policías partían.

5. Una señora que observó lo sucedido llamó al Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron a la zona y trasladaron al joven Mendoza Amador al Hospital Escuela Universitario, donde permaneció en la Sala de Quemados por veintiocho días, con quemaduras de I y II grado en brazos, tórax y cara⁵. Asimismo, la presunta víctima sufrió de cuadros depresivos mientras estuvo hospitalizado e intentó quitarse la vida.

6. El amigo de la presunta víctima, con auxilio de la Organización No Gubernamental “Casa Alianza” y los peticionarios, presentaron denuncia ante el Ministerio Público, en donde se requirió la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. La investigación por el delito de lesiones graves y homicidio en grado de tentativa inició oficialmente el 5 de junio de 2007. La Fiscalía ordenó la práctica de prueba anticipada el 22 de junio de 2007⁶, en atención a la depresión presentada por la presunta víctima y para efectos de salvaguardar su declaración procesal.

7. Los peticionarios aseveran que, desde el inicio de las investigaciones y hasta la fecha, únicamente consta en el expediente: la declaración de la presunta víctima y su amigo; el testimonio de cuatro testigos que fueron localizados; el testimonio de los policías que conducían la patrulla con el número que divisó el amigo de la presunta víctima; remisiones de diligencias investigativas a la Dirección General de Investigación Criminal, sin actualización alguna; y una última diligencia investigativa del 2 de marzo del 2010 consistente en una declaración del joven Mendoza Amador. Los peticionarios indican que pese a que enviaron

⁴ Encontrado en documento anexo a la petición, relativo a la ampliación a la declaración del joven Mendoza Amador ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, del 26 de marzo de 2009.

⁵ Conforme al Expediente Clínico 2051377 y al Dictamen Médico del 10 de julio de 2007 realizado por requerimiento de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Este último indica sobre la presunta víctima: *“masculino, de 20 años, desempleado, soltero con historia de haber sido objeto de agresión física por policía al tirarle tinner (sustancia química irritante) y de prenderle fuego, al examen físico hay evidencia externa de lesiones [...] quemaduras Grado I (Formación de flictenas en capa de piel dermis con 25% de superficie corporal total dañado), hoy en día el peligro de vida puede ser hasta una pérdida del 80% de la superficie corporal [...] Tipo de lesiones: Quemaduras (cara, cuello tórax, abdomen, brazo y antebrazo izquierdo, antebrazo y mano derecha) compatibles a las producidas por líquido inflamable (químico).*

⁶ Conforme al Estado dicha declaración fue rendida y registrada bajo el número 984-2007-J-18.

diferentes solicitudes a la Fiscalía –sin precisar las fechas de éstas–, únicamente les contestaban de forma verbal señalándoles que no se avanzaba con la investigación porque *“los testigos no querían declarar”*⁷.

8. La parte peticionaria indica además que el joven Mendoza Amador sufrió de amenazas por parte de policías luego de que se abrió la investigación penal, por lo que siempre huía de ellos. Se encuentra en un documento anexo a la petición relativo a la ampliación de declaración del joven Mendoza Amador, del 26 de marzo de 2009 que este manifestó: *“a cada rato me lleva la policía por nada, siempre que me encuentran me llevan, cuando me miran cada tres días, entonces yo vivo escondido de los policías porque tengo miedo, porque me han dicho que la próxima vez no me van a tirar tiner, sino que gasolina, la patrulla es del Manchen”*.

9. Por los hechos denunciados, los peticionarios aducen que existe una falta de diligencia y compromiso con la investigación por parte de las autoridades, asimismo que no se cumplió con un plazo razonable en la etapa preparatoria del proceso, lo que ocasionó una impunidad que lleva años. Por lo que piden ante la CIDH que se aplique la excepción del agotamiento de recursos internos.

10. Por otro lado, y respondiendo al Estado en cuanto a que *“continúan con las diligencias investigativas”*, el peticionario refuta que no se indicaron cuáles serían los avances ni los resultados; consideran que el Estado continúa violentando el plazo razonable para una investigación tras más de quince años, sin que exista un esfuerzo real por parte de las autoridades de encontrar a los responsables.

11. En lo relativo a la aseveración del Estado de que *“no se puede evidenciar, siquiera con mínimos indicios, que el hecho se hubiera cometido por Agentes Policiales”*, el peticionario recuerda que también se está denunciando la falta de diligencia y el retardo injustificado en la investigación de los hechos y sanción de los responsables y no únicamente la responsabilidad de los agentes involucrados.

12. El peticionario se refiere también a la investigación administrativa –que el Estado señaló en su respuesta a la petición– realizada por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (en adelante “DIDAPOL”) en el expediente 121-2007; y asegura que ésta no tiene que ver con el objeto de la petición.

13. Cabe señalar que la parte peticionaria informa que el joven Mario Yobanny Mendoza Amador fue asesinado el 4 de abril del 2018; sin embargo, no busca establecer un vínculo entre el homicidio de la presunta víctima y los hechos denunciados en la petición.

14. Finalmente, piden que se finalice la investigación de los hechos; que se establezcan medidas de reparación *“consistentes en el reconocimiento público del Estado por la violación de los derechos humanos mediante medios de comunicación escritos y orales; reconocimiento póstumo, se otorgue por parte del Estado mayor protección a las víctimas vulnerables, especialmente cuando son huérfanas, o viven en las calles, que este caso sea citado en la Academia de Policía de Honduras, como ejemplo de mala práctica policial”*.

Posición del Estado hondureño

15. El Estado, por su parte, sostiene que la petición debe ser inadmitida por: i) falta de caracterización; y ii) falta de agotamiento de los recursos internos.

16. Manifiesta que en los alegatos no hay una caracterización precisa de los hechos que se consideran lesionados y que no resulta procedente la admisibilidad en consonancia con el principio de complementariedad que rige al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sostiene que, si bien la denuncia se realizó contra agentes policíacos tras las diligencias realizadas, no hay elementos para aseverar

⁷ En este mismo sentido, consta un documento anexo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del 27 de noviembre de 2008, dirigido a la Inspectoría General de la Policía Nacional, en donde señalan: *“Deseamos manifestarle que al no contar con testigo que pudiera identificar a los agresores, no hemos logrado el efecto deseado en las investigaciones realizadas por esta Fiscalía, solicitando Mediante Oficio FEDH-1047 el expediente levantado al efecto por Asuntos Internos, en virtud de que existe un hermetismo por parte de policías que escucharon el rumor de quienes habían participado en tan abominable hecho, el cual no pude quedarse impune por la magnitud del mismo”*.

que estos fueron los responsables de los hechos, haciendo imposible que se le atribuya la responsabilidad al Estado por las vulneraciones a la integridad personal de la presunta víctima.

17. Para apoyar la afirmación de que *"no se puede evidenciar, siquiera con mínimos indicios, que el hecho se hubiera cometido por Agentes Policiales"*, asegura que incluso en la declaración del joven Mendoza Amador, él no pudo individualizar a los agentes, y refiere que la presunta víctima se encontraba bajo la influencia del inhalante durante los hechos ocurridos. Igualmente, el Estado comunica que DIDAPOL realizó diligencias sobre los hechos, dentro del expediente 121-2007, y que dicha investigación interna concluyó que no existían elementos probatorios que involucraran a los agentes policiales de la patrulla investigada.

18. Asimismo, Honduras considera que siempre se mantuvo la igualdad en el tratamiento a la presunta víctima; lo que se evidencia en la atención médica que se le brindó, en que tuvo acceso a denunciar, y en que se inició la investigación correspondiente.

19. En cuanto al agotamiento de recursos internos, el Estado advierte que el amigo de la presunta víctima denunció los hechos ante el Ministerio Público el 5 de junio de 2007, bajo el registro 2561-2007. A partir de ese momento, se abrió el expediente administrativo 6651-200, iniciándose una investigación en contra de los policías asignados a la patrulla que tenía cobertura en el lugar de los hechos. Conjuntamente, el Estado informa que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, instruyó a la Dirección General de Investigación Criminal para investigar los hechos, y afirma que *"en la actualidad se continúan realizando diligencias investigativas"*. Así, sostiene la falta de agotamiento de los recursos internos, porque hay procedimientos por agotar y el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

20. Honduras considera que se han tomado las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones internacionales, y que la obligación del Estado es de medio y no de resultado. Evoca que el plazo razonable puede variar dependiendo de la complejidad del asunto, y que en los hechos narrados no hay una claridad porque no ha sido posible individualizar la participación de agentes policiales.

21. Referente a los artículos invocados por la parte peticionaria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera que el peticionario no relacionó concretamente en qué se centraría la violación y no señaló correlación con los hechos denunciados. En lo relativo a la Convención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Estado reitera que no se ha podido deducir de manera razonable que los hechos son atribuibles al Estado; además, que han cumplido con la obligación de prevenir las violaciones establecidas en los distintos instrumentos internacionales reconocidos por el Estado.

22. Finalmente, el Estado informa que, si bien no es objeto de la petición, el homicidio de la presunta víctima está siendo investigado por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, registrado con número 0801-2018-0185.

VI. ANÁLISIS DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

23. La Comisión observa que el objeto de la petición consiste, por un lado, en un reclamo relativo al abuso de autoridad y las violaciones al derecho a la vida e integridad de la presunta víctima, luego de ser agredido y torturado por elementos de la Policía. Por otro lado, la petición se refiere a la presunta falta de investigación adecuada y expedita, y sanción a los responsables. Por su parte, el Estado alega la falta de agotamiento de éstos en tanto a que las investigaciones ante la Fiscalía siguen activas.

24. En vista de los hechos alegados en la presente petición, la Comisión recuerda que, en situaciones que incluyen delitos contra la vida e integridad, los recursos internos que deben tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad de las peticiones son los relacionados con la investigación y sanción

de los responsables⁸. Al respecto, la Comisión ha señalado con anterioridad que tratándose de casos como el presente, que involucran posibles violaciones a los derechos humanos, esto es, perseguibles de oficio, y más aún cuando agentes del Estado estarían implicados en los hechos alegados, el Estado tiene la obligación de investigarlos. Esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de éstos o de la aportación de pruebas por parte de los mismos⁹.

25. En el presente caso, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información presentada por la parte peticionaria y reiterada por el Estado, los hechos motivo de la presente petición ocurrieron el 31 de mayo de 2007, y que, tras la denuncia de los peticionarios, la Fiscalía inició a investigar el 5 de junio de 2007 por los delitos de lesiones y homicidio en el grado de tentativa, y que las investigaciones aún continúan abiertas, inconclusas. Sumado al hecho de que parte de los alegatos de los peticionarios están precisamente relacionados con eventuales actos de acoso policial a la presunta víctima, posteriores a las agresiones de que fue objeto. Así, han transcurrido más de quince años, y aún no han sido esclarecidas las circunstancias de las lesiones graves de la presunta víctima ni se ha determinado los responsables. A pesar de que se trató de un hecho concreto, que involucró a una presunta víctima, y que ocurrió en la propia capital del Estado, a la vista de al menos dos testigos; y que inmediatamente luego de los hechos la presunta víctima acudió a un hospital público. En consecuencia, la CIDH concluye que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2.c) de la Convención.

26. A este respecto, la Comisión reitera, en primer lugar, como lo ha hecho consistentemente, que el artículo 46.2 de la Convención, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo frente a las normas sustantivas de la Convención Americana. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. La CIDH también ha subrayado que no existen disposiciones convencionales o reglamentarias que regulen de modo específico el lapso que constituye retardo injustificado, por lo cual la Comisión evalúa caso por caso para determinar si se configura dicho retardo¹⁰. En esta línea, la Corte Interamericana ha establecido como principio rector del análisis del eventual retardo injustificado como excepción a la regla del agotamiento de los recursos internos, que *"de ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa"*¹¹. Es decir, a juicio de la Comisión, la naturaleza complementaria de la protección internacional prevista en la Convención Americana implica también que la intervención de los órganos del Sistema Interamericano sea oportuna para que esta pueda tener algún tipo de efecto útil en la protección de los derechos de las presuntas víctimas.

27. En cuanto al plazo de presentación, la Comisión observa que los hechos materia del reclamo iniciaron el 31 de mayo de 2007 y la investigación de los hechos inició el 5 de junio de 2007; que la petición fue recibida en la CIDH el 5 de diciembre de 2012, y que los efectos de las violaciones, en términos de la alegada impunidad, se extenderían hasta el presente. Así, la Comisión concluye que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable de acuerdo con el artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH.

VII. ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS

28. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto al presunto abuso de autoridad y la violación de la integridad y vida de Mario Yobanny Mendoza Amador, por la alegada tortura realizada por los policías al prenderle fuego; así como la falta de protección judicial efectiva,

⁸ CIDH, Informe No. 72/18, Petición 1131-08. Admisibilidad. Moisés de Jesús Hernández Pinto y familia. Guatemala. 20 de junio de 2018, párr. 10.

⁹ CIDH, Informe No. 159/17, Petición 712-08. Admisibilidad. Sebastián Larroza Velázquez y familia. Paraguay. 30 de noviembre de 2017, párr. 14; y CIDH, Informe No. 68/08, Petición 231-98, Admisibilidad, Ernesto Travesi, Argentina, 16 de octubre de 2008, párr. 32.

¹⁰ CIDH, Informe N° 14/08, Petición 652-04. Admisibilidad. Hugo Humberto Ruíz Fuentes. Guatemala. 5 de marzo de 2008, párr. 68.

¹¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velásquez Rodríguez vs Honduras, Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 93.

investigación de tales hechos y sanción de los responsables. El Estado mantiene que no se configuran violaciones contra la presunta víctima en cuanto a que no se pudo establecer que fueron policías los que atacaron al joven Mendoza Amador; además, que se ha respetado el acceso a denuncias y a una investigación penal por los hechos, la cual sigue activa.

29. En lo que respecta a las afirmaciones del Estado relativas a la falta de caracterización, la Comisión reitera que, a efectos de la admisibilidad, debe determinar si los hechos alegados podrían caracterizar una violación de derechos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.b de la Convención Americana, si la petición es “manifiestamente infundada” o si es “evidente su total improcedencia” de conformidad con el inciso c) de dicho artículo. Los criterios para evaluar estos requisitos difieren de los que se usan para emitir un fallo sobre el fondo de una petición. Análogamente, en el marco de su mandato, la Comisión tiene competencia para declarar una petición admisible si se refiere a procesos internos que podrían conculcar derechos garantizados por la Convención Americana. En otras palabras, a la luz de las normas convencionales antedichas, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Comisión, el análisis de la admisibilidad se centra en la verificación de tales requisitos, que se refieren a la existencia de elementos que, de ser ciertos, podrían constituir *prima facie* una violación de la Convención Americana¹².

30. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes, la Comisión estima que los hechos presentados por la parte peticionaria no son manifiestamente infundados. En particular, la Comisión considera que los reclamos relativos a los supuestos actos de tortura y lesiones contra el joven Mendoza Amador, ocasionadas presuntamente por agentes policíacos; abuso de autoridad; las amenazas recibidas posteriormente por la presunta víctima por parte de la Policía; y que el Estado no hubiera actuado con la debida diligencia dentro de un plazo razonable para investigar y aclarar los hechos tras más de quince años, podrían constituir violaciones de los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos).

31. En relación con los demás instrumentos internacionales alegados por los peticionarios, la Comisión carece de competencia para establecer violaciones a las normas de dichos tratados, sin perjuicio de lo cual podrá tomarlos en cuenta como parte de su ejercicio interpretativo de las normas de la Convención Americana en la etapa de fondo del presente caso, en los términos del artículo 29 de la Convención Americana¹³.

VIII. DECISIÓN

1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con su artículo 1.1 de la Convención Americana; y

2. Notificar a las partes la presente decisión; continuar con el análisis del fondo de la cuestión y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 12 días del mes de mayo de 2023. (Firmado): Margarette May Macaulay, Presidenta; Roberta Clarke, Segunda Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón y Carlos Bernal Pulido, miembros de la Comisión.

¹² CIDH. Informe No. 143/18, Petición 940-08. Admisibilidad. Luis Américo Ayala Gonzales. Perú, 4 de diciembre de 2018, párr. 12; y CIDH. Informe No. 293/20, Petición 434-09. Admisibilidad. Gabriel Ulises Valdez Larqué y familiares. México, 13 de octubre de 2020, párr. 22.

¹³ CIDH, Informe No. 111/17. Petición 883-07. Admisibilidad. Rosario Bedoya Becerra. Colombia. 7 de septiembre de 2017, párr. 15.